

NOTAS ACTUALES

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

4 de agosto de 2005



«Buscamos implementar una cultura de paz y solucionar los problemas de las personas mediante el dialogo», afirma la psicóloga Roxana Sanchez López.

CONTENIDO

Estados Unidos ayuda a lograr transparencia en investigaciones de delitos.

pág. 3



Acceso a los tribunales e igualdad de justicia para todos.

pág. 5



CENTROS INTEGRALES DE JUSTICIA EN EL ALTO

UN COMPROMISO VOLUNTARIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD



Veronica, Graciela y Maribel del cuarto medio del colegio Ingavi caminan tres veces a la semana durante una hora, para poder llegar al centro de justicia del distrito 4 de Alto Lima donde trabajan en la plataforma de información. Al observar el continuo trabajo de asesoría legal ofrecido en el centro y ver como los otros abogados y voluntarios logran resolver los problemas de la gente y llegar a conciliaciones amistosas, ellas han decidido estudiar derecho.

La Dra. Nancy Gabriela Michel Saravia trabaja ad honorem dos mañanas a la semana en el centro, asesorando en todas

las áreas jurídicas: penal, civil, familiar y laboral. A pesar de que ella no es vecina de la zona, y vive muy lejos de El Alto, en el barrio de Miraflores, y debe tomar tres distintas movibilidades para llegar al Centro, su motivación para realizar el voluntariado es un compromiso con su profesión y con la sociedad: «Existe un vacío que trato de llenar en la justicia, que se ha alejado de las personas. Desde el momento en que yo presté el juramento ante el Colegio de Abogados, este juramento nos señala que debemos asistir a las personas de escasos recursos. Es una gran satisfacción la de poder prestar un servicio social a la comunidad».

Esperanza Xuxo de Limachi va al centro a diario hasta las doce, pero cuando hay muchos casos se queda hasta las dos de la tarde: «Primero oigo los problemas de los vecinos y luego yo los oriento sobre como los pueden resolver y conciliar, así es como he aprendido a hacerlo en los cursos de capacitación. Yo me siento bien satisfecha al poder arreglar los problemas de las familias y otros.»

El profesor David Ordoñez cuenta que a veces hay algunos incumplimientos de las personas que han llegado a acuerdos. En ese caso, los miembros del centro realizan no una citación sino una nueva invitación a concurrir al Centro para volver a negociar la conciliación. «A algunos ya los llamamos los caseros», bromea otra de las voluntarias del centro del Distrito Uno, la psicóloga Roxana Sanchez, especialista en conciliación. Ella dice que el aprendizaje fundamental que se les dio durante los cursos de capacitación, fue el de implantar una cultura de paz y solucionar pacíficamente los problemas de las personas mediante el diálogo.

La enfermera Betty Mamani trabaja en la sección de plataforma, el primer lugar de atención al público. Ella escucha los problemas de las personas y de acuerdo a ellos, los deriva al área de conciliación, a la de comunicación educativa o a la de servicios judiciales, que proporciona orientación jurídica a través de trámites legales, homologaciones y seguimiento de los casos. Betty va todas las mañanas al centro. En las noches trabaja como enfermera en el hospital de Viacha. Duerme apenas parte de la tarde puesto que también toma clases de odontología. Sin embargo, no se siente cansada y tiene un entusiasmo contagioso: «Amo mi trabajo en el centro. Me encanta poder ayudar a las personas a resolver sus problemas. Recuerdo un caso particularmente bonito cuando vinieron dos familias enteras de un ayllu en el campo. La esposa, que reclamaba asistencia familiar trajo a toda su familia, y el marido hizo lo mismo con su parentela. Llegaron a la una de la tarde cuando ya estábamos por irnos a almorzar, pero nos dió pena despacharlos porque habían venido desde muy lejos. En lo que oíamos las quejas de ambos lados se hizo las dos de la tarde;

las familias sacaron sus 'ajtapis' de comida y empezaron a servirse de todo en el suelo. Como nosotros estábamos muertos de hambre nos antojamos con el olor y yo les pregunté si podían invitarnos. Acabamos todos juntos comiendo del ajtapi y entrada la tarde logramos hacer la conciliación.»

En el centro de justicia del Distrito Uno, Dolores Quispe se parte en dos para atender a su familia que vive al frente, y cuidar y limpiar el centro en el que pasa la mayor parte de su tiempo. También cocina ocasionalmente para el personal del centro, con los que comparte varias horas del día.

Lorgio Campos Quiroz está encargado del área de servicios judiciales y va a diario a prestar sus servicios al centro.



El equipo de voluntarios del Centro de Justicia del Distrito Uno discutiendo un caso con el juez asignado.

Además de los seis centros que funcionan en El Alto, hay otros dos centros integrales de justicia en Caranavi y en Chimoré, que ofrecen servicios similares a la población.

Aunque no es abogado, por problemas de una herencia patrimonial, tuvo que pasar 20 largos y tortuosos años en medio de juicios y juzgados. El ha sufrido en carne propia los interminables procesos judiciales del antiguo sistema de justicia. Pero también ha aprendido mucho sobre leyes, trámites y procedimientos. Ahora quiere servir a la sociedad con su experiencia y conocimientos, aunque la mayoría de los casos que atiende no tienen que ver con patrimonio sino con violencia intrafamiliar. «Una demanda de asistencia familiar dura por lo menos dos años en juzgados regulares, mientras que aquí en el centro, se la resuelve en una semana con la homologación del doctor,» dice Lorgio. «La gente no cree a veces que el trámite sea gratuito ni que puedan salir con un acta de conciliación o de homologación gratis.»

El juez dice que su trabajo se limita casi por completo a la orientación, asesoramiento de casos y homologación de los mismos, puesto que un 90% de los casos se arreglan en las plataformas de conciliación que funcionan muy eficazmente: «Es muy importante que los ciudadanos aprendan también a resolver sus conflictos, mediante la ayuda de los voluntarios, que todavía son pocos para la demanda de casos.» Con el tiempo y la experiencia, aclara el juez, estos centros tienen que funcionar como cualquier juzgado de ciudad o provincia.

Los 150 primeros voluntarios que fueron capacitados durante seis meses por el Vice Ministerio de Justicia fueron designados solamente para fiscalizar los centros. Ahora en cambio, ellos son los que sostienen y manejan el centro, trabajando en diferentes turnos establecidos por cronogramas. Los únicos sueldos que paga el Vice Ministerio de Justicia son los del juez y coordinador del centro. Todo el resto del equipo, trabaja gratuitamente en diferentes turnos, sin siquiera recibir a cambio un te caliente para paliar el frío. Ellos deben llevarse su propio alimento y bebida durante sus turnos que a menudo se prolongan más de lo establecido, debido a la demanda de la gente que acude a los centros en busca de asistencia legal. Los voluntarios, que realizan una impresionante obra de asistencia y compromiso con su comunidad, no son en su mayoría abogados, aunque también los hay designados por el Vice Ministerio de Justicia que está a cargo de la tuición del proyecto. Entre los voluntarios hay gente de toda clase, oficio y edad, desde ancianos retirados hasta colegiales de último curso. Hay entre ellos también pasantes de la carrera de derecho de la Universidad Privada de El Alto. Los vecinos de cada centro trabajan también voluntariamente para cuidar y limpiar los centros, que fueron construidos en áreas de equipamiento municipal, cedidas por las juntas de vecinos: se trata verdaderamente de centros comunitarios donde los vecinos participan activamente ofreciendo su tiempo, su trabajo y su esfuerzo para construir una cultura de paz y resolución consensuada de los problemas.

—Fue entregado el Instituto de Investigaciones Forenses, el primero en su género y que cuenta con la más alta tecnología.

ESTADOS UNIDOS AYUDA A LOGRAR TRANSPARENCIA EN INVESTIGACIONES DE DELITOS



La licenciada en biología Patricia Miranda es la encargada del laboratorio de biología forense, que realiza los análisis de cabellos, vellos, saliva y fibras.

El Instituto de Investigaciones Forenses, que será la instancia encargada de realizar todos los estudios científico-técnicos requeridos para la investigación de delitos o la comprobación de otros hechos por orden judicial con la más alta tecnología, fue recientemente inaugurado con la presencia de autoridades del poder judicial y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El Instituto, cuya infraestructura, equipamiento, capacitación e implementación de los equipos de última generación, demandó alrededor de un millón y medio de dólares, es el primero en su género en Bolivia en realizar análisis no manuales sino automatizados. Un acuerdo con instituciones del Estado boliviano posibilitó también que técnicos nacionales hayan recibido entrenamiento en el exterior para permitir una atención altamente especializada en el análisis de pruebas y evidencias.

Esta iniciativa forma parte de la cooperación que el gobierno de los Estados Unidos otorga a Bolivia, en este caso para mejorar la administración de justicia y contribuir a la transparencia de las investigaciones en delitos de orden penal.

El gobierno de los Estados Unidos contribuye sostenidamente al pueblo y gobierno de Bolivia para mejorar la correcta administración de justicia. Estados Unidos no solamente está respaldando al Ministerio Público mediante este Instituto, sino que ha apoyado la Reforma del Código de Procedimiento Penal y trabajará apoyando la iniciativa del gobierno de Bolivia para dar modernidad al Código de Comercio.

El Instituto de Investigaciones Forenses fue equipado con un sistema sofisticado que incluye servicios que constituyen un verdadero aporte de la ciencia y la tecnología al desarrollo de la justicia confiable en Bolivia.

Los servicios que ofrece el Instituto son:

LABORATORIO CLÍNICO FORENSE

Encargado de analizar muestras y/o evidencias para identificar y cuantificar sustancias tóxicas como el etanol, metanol, cocaína, cannabinoides, plaguicidas, opiáceos, tipos de sangre, semen, análisis de cabellos, vellos, paternidad y maternidad biológica, análisis de ADN, enfermedades de transmisión sexual, etc.

- Toxicología
- Biología
- Química
- Genética

LABORATORIO CRIMINALÍSTICO

Encargado de verificar documentos nuevos y antiguos, comparación de firmas, falsificación de documentos y dinero, comparación balística, establecimiento de la trayectoria de la bala, colecta y recuperación de la huellas identificación de huellas y otros

- Documentología
- Balística
- Huellografía
- Planimetría y dibujo forense

MEDICINA FORENSE

Valoración de daño corporal, certificación de días de incapacidad, valoración de intoxicados por alcohol y drogas, autopsias, necropsias, elaboración de perfiles de personalidad criminal, daño psíquico y otros igualmente importantes

- Lesionología
- Tanatología
- Autopsias
- Psiquiatría
- Psicología
- Imageneología



de origen criminal para la identificación humana, que se pueden analizar hasta diez años después si están adecuadamente preservadas en el caso del semen o la sangre en prendas de vestir, pero si la sangre está conservada en un tubo de ensayo en refrigerador especial, hasta quince años, informa el coordinador del IDIF Omar Rocabado, bioquímico experto en antropología y genética forense, ha trabajado en el proyecto del Instituto desde hace tres años, y ha hecho variados cursos de especialización en el exterior.



El secuenciador de ADN tiene una gran capacidad de análisis simultáneos de hasta 96 diferentes muestras, y en tan sólo dos minutos, puede analizar una muestra. «El Instituto ha unido dos cosas muy importantes que otros países en Latinoamérica no tienen: la parte criminalística con los laboratorios de toxicología, genética, química y biología. Actualmente en Latinoamérica existen institutos de medicina legal que cuentan solamente con la parte de laboratorio pero sin la parte criminalística,» dice Rocabado, al afirmar que el Instituto Forense de Bolivia es uno de los más completos del mundo.

La existencia de esta infraestructura evitará la contaminación de las evidencias cuando se cometan delitos de orden penal; garantizará transparencia en los resultados de los exámenes de los laboratorios existentes en el Instituto y precautelará sobre todos los principios la administración justa, equilibrada y correcta de la justicia para todos los ciudadanos.

«El Instituto ha unido dos cosas muy importantes que otros países en Latinoamérica no tienen: la parte criminalística con los laboratorios de toxicología, genética, química y biología.»

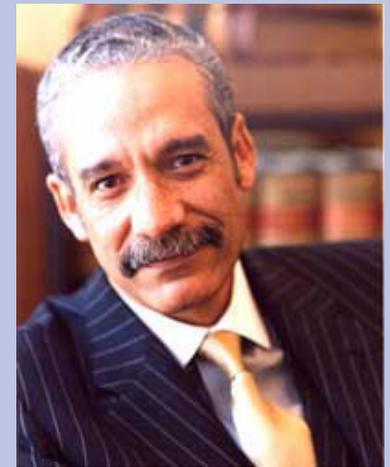
Omar Rocabado, Coordinador del IDIF, (foto superior derecha).

Antes de la creación del Instituto, la recolección de evidencias, su análisis, su credibilidad y, por lo tanto, sus consecuencias fueron puestos en duda porque no se contaban con los equipos científicos y especializados. Algunos casos de la justicia penal no lograron ser resueltos debido a estas carencias, otros tuvieron que recurrir a equipos y laboratorios del exterior para que devuelvan resultados confiables. Ahora, el nuevo secuenciador de ADN por ejemplo, es un analizador genético único en Bolivia y uno de los pocos en Sudamérica, que permite obtener resultados al igual que en cualquier país en Europa o en los laboratorios del FBI en Estados Unidos. Los exámenes de ADN son realizados con fines de investigación de paternidad biológica y sobre muestras y/o evidencias



Por Robert J. Grey, Jr.

ACCESO A LOS TRIBUNALES E IGUALDAD DE JUSTICIA PARA TODOS



Un poder judicial imparcial e independiente es el custodio de los derechos individuales en una sociedad democrática. Para que los ciudadanos tengan fe en su sistema de tribunales, todos deben tener acceso a los tribunales cuando lo necesitan. El autor describe el funcionamiento práctico de esta doctrina en Estados Unidos, en los asuntos civiles y penales, y la contribución de los profesionales del derecho del país para hacer que el lema de «igualdad de justicia para todos» sea una realidad. Concluye el artículo con algunos ejemplos de los esfuerzos del Colegio de Abogados de Estados Unidos para mejorar el acceso a la justicia más allá de las fronteras de Estados Unidos, a través de sus programas internacionales sobre el estado de derecho.

Robert J. Grey Jr., es presidente del Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA) y socio del bufete de abogados Hunton & Williams de Richmond, Virginia. Su labor se concentra en casos administrativos ante las agencias de gobierno estatales y federales. Se ha desempeñado también como presidente de la Cámara de Delegados de la ABA y miembro de la Junta de Gobernadores. El autor desea agradecer la contribución de las siguientes entidades de la ABA a este artículo: El Centro Judicial, el Consorcio de Servicios Legales y el Público, la Comisión sobre Violencia en el Hogar, el Centro sobre los Niños y la Ley, la Iniciativa de Derecho para América Latina y el Caribe (ABA/LALIC), la Iniciativa de Derecho para Europa Central y Eurasia (ABA-CEELI), la Iniciativa de Derecho para Asia (ABA-Asia) y la Iniciativa de Derecho para África (ABA-Africa).

Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente las opiniones o políticas del gobierno de Estados Unidos.

En una sociedad democrática, donde los gobernados renuncian a una parte de su autonomía, el sistema judicial es el custodio contra los abusos de quienes ostentan el poder. Los ciudadanos aceptan limitaciones a su libertad a cambio de la coexistencia pacífica y esperan que cuando surjan conflictos entre ellos, o entre ellos y el Estado, puedan recurrir a un lugar que sea independiente de influencias indebidas, que sea digno de confianza y que tenga autoridad sobre todas las partes para resolver las diferencias de manera pacífica. Los tribunales, en cualquier régimen democrático, son ese lugar de refugio. El presidente del Tribunal Supremo William Howard Taft dijo en 1926 que «la bendición práctica de nuestra Declaración de Derechos consiste en su disposición de procedimientos fijos que aseguran a cada individuo un juicio justo por tribunales independientes».

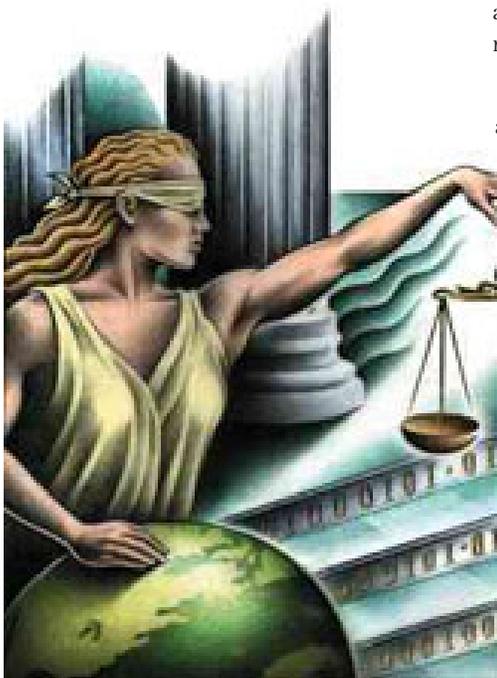
Un valor fundamental del sistema de justicia en Estados Unidos es que la estabilidad de nuestra sociedad depende de la facultad del pueblo de obtener fácil

acceso a los tribunales, porque el sistema judicial es el mecanismo reconocido y aceptado por todos para la resolución pacífica de controversias. Negar el acceso a los tribunales fuerza a resolver las controversias por otros medios y lleva a la gente a tomarse la justicia por su mano y a recurrir a la violencia.

Los sistemas de justicia de Estados Unidos están estructurados para garantizar a todos los ciudadanos el acceso a los tribunales y la igualdad ante la justicia. La Constitución de Estados Unidos y las constituciones de los 50 estados contienen artículos concretos sobre el poder judicial. Los sistemas judiciales de Estados Unidos son poderes separados, e iguales de gobierno, que mantienen su autonomía mediante sus propias estructuras, atribuciones y reglas. El principio de independencia judicial incorporado en las constituciones federal y estatales y en la historia jurídica y política del país, permite a los jueces tomar decisiones basadas en el derecho y en los hechos de cada caso, en vez de en la opinión popular o consideraciones políticas

Los sistemas judiciales de Estados Unidos incluyen los tribunales federales y otros tribunales separados para cada uno de los 50 estados, el Distrito de Columbia y los cinco territorios. Estos sistemas distintos atienden aproximadamente 100 millones de casos al año, en su gran mayoría en los tribunales estatales. En el plano federal, aproximadamente 2.200 jueces sirven en los 50 estados, en las capacidades siguientes: magistrados del Tribunal Supremo, jueces de tribunales de apelación, jueces de tribunales de distrito, jueces de quiebra y jueces de paz. En el plano estatal, aproximadamente 31.000 jueces ejercen sus funciones desde los tribunales superiores a los tribunales locales de jurisdicción limitada.

Cada estado y territorio tiene competencia para establecer y dirigir su propio sistema de tribunales. La estructura de los sistemas de tribunales estatales varía de un estado a otro. Algunos estados tienen sistemas «unificados» o simplificados, sistemas de sólo dos o tres niveles, mientras que otros tienen múltiples niveles de tribunales para distintos tipos de casos. Se selecciona a los jueces mediante una variedad de métodos que van desde el nombramiento por el gobernador, a la elección popular y la selección por la legislatura. Los mandatos de los jueces estatales varían desde los cuatro años a los de carácter vitalicio.



LA IGUALDAD DE JUSTICIA EN LA PRÁCTICA

Al examinar la idea del acceso a los tribunales, el simple acceso, en el sentido teórico o jurídico, no es suficiente; más bien, son los resultados que se derivan de las decisiones de los tribunales los que le dan significado a este concepto. Por ejemplo, el valor del «acceso» es evidente cuando los tribunales deciden que nadie, en particular quienes ostentan el poder, está por encima de la ley, o cuando el acceso requiere el derecho a la asesoría de un abogado en casos en que la libertad del individuo está en peligro.

La aplicación práctica del derecho fundamental al acceso a los tribunales de conformidad con la Constitución de Estados Unidos se ha puesto a prueba a lo largo de la historia de nuestro país. Ha sido invocado e impugnado por muchos. Desde un principio, el Tribunal Supremo estableció su competencia en todas las disputas. En 1807, el presidente Thomas Jefferson invocó el privilegio ejecutivo en un caso contra Aaron Burr a quien acusó de traición. En su defensa, Burr pidió al Tribunal que dictase una orden judicial que ordenara que Jefferson presentara su correspondencia privada con respecto a Burr, a lo que Jefferson se negó. El presidente del Tribunal, John Marshall, desoyó el argumento del presidente Jefferson y dictaminó que la afirmación del presidente de que la publicación de los documentos pondría en peligro la seguridad pública era un asunto que competía dirimir al Tribunal, no al presidente.

La inmunidad presidencial se volvió a discutir casi 200 años después. En 1974, un fiscal especial ordenó a la Casa Blanca la entrega de cintas grabadas para verificar si el presidente estaba implicado en un escándalo político conocido como Watergate. El presidente Richard Nixon trató de que se anulara la orden, para lo que se amparó en el privilegio ejecutivo. El Tribunal, por voto de ocho a cero, dictaminó que las cintas se tenían que entregar porque el Tribunal había determinado que nadie, ni siquiera el presidente de Estados Unidos, está completamente por encima de la ley.

En el dictamen que siguió, el presidente del Tribunal Supremo, Warren Burger, señaló: «Ni la doctrina de separación de poderes, ni la necesidad de confidencialidad de las comunicaciones de alto nivel, sin más, puede sostener un privilegio presidencial incondicional, absoluto, de exención del proceso judicial en cualquier circunstancia».

La importancia del acceso libre a los tribunales tal vez se reconoce mejor en las causas penales que entrañan el derecho a un asesor legal. En Estados Unidos se ha establecido que, al menos en causas penales en las que está en juego la pérdida de la libertad, no se puede considerar que una persona tiene acceso a la justicia a menos que se le facilite la asistencia de un abogado. En una decisión trascendental de 1963, el Tribunal Supremo sostuvo que la Constitución de Estados Unidos exige que se facilite asesoría legal a los acusados indigentes en los procedimientos estatales por delitos graves (*Gideon contra Wainwright*). Decisiones posteriores del Tribunal ampliaron el derecho de los acusados indigentes a la asesoría legal a los procedimientos estatales por delincuencia juvenil, procedimientos estatales por delitos menores con penas de privación de la libertad, procedimientos estatales por delitos menores con condena condicional de privación de libertad, y el primer recurso ante un tribunal de apelación. Además, el tribunal ha dictaminado que el derecho a letrado se aplica a diversas etapas esenciales previas al juicio, incluidos los interrogatorios bajo custodia, la identificación en ruedas de identificación de sospechoso, la lectura de cargos, las vistas preliminares y la negociación de la declaración de culpabilidad o inocencia del acusado. Las decisiones tienen por objeto proteger a los ciudadanos de castigos injustos.

LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS DISCAPACITADOS

La igualdad de acceso a los tribunales no está reservada exclusivamente a los ciudadanos adultos. Los menores merecen el mismo acceso a los tribunales del país, porque también son ciudadanos y merecen ser oídos. No obstante, se enfrentan a obstáculos adicionales. Los

menores no pueden iniciar acción legal sin la ayuda de un adulto; puede ser que no sepan a dónde recurrir o incluso si pueden obtener ayuda; y a veces no se les hace caso o pasan inadvertidos. Sin embargo, mejorar el acceso de los menores a la administración de la justicia puede contribuir a fortalecer a las familias y alentar a las víctimas a que revelen los delitos cometidos contra su persona y apoyar el proceso legal.

El ordenamiento jurídico de Estados Unidos se ha esforzado durante los últimos decenios para poner la justicia más al alcance de los menores y sus necesidades especiales. Determinadas decisiones judiciales, entre ellas varias del Tribunal Supremo, han facilitado la prestación de testimonio de los menores ante los tribunales. La adopción de procedimientos especiales, como la toma de testimonio en circuito cerrado y la asistencia de abogados especiales de menores, pueden amortiguar el trauma que pueden sufrir los niños testigos. Los juzgados con un ambiente acogedor para los niños, donde los muebles son de su tamaño y en los que el juez no se sienta en un estrado elevado por encima de todo el mundo, pueden hacer que los niños se sientan más tranquilos. Muchas jurisdicciones han establecido procedimientos interdisciplinarios que adaptan las intervenciones teniendo presente el interés de los niños para evitar causarles nuevos daños.

En fechas más recientes, los estadounidenses incapacitados han recurrido a los tribunales mismos, a los que han reclamado que se les facilite el acceso. En la causa de *Tennessee contra Lane* (2004), los demandantes, entre los que figuraba un hombre parapléjico que tenía que arrastrarse por dos tramos de escaleras para asistir a una vista de un tribunal de Tennessee, presentaron una querrela con arreglo al Título II de la Ley de los Estadounidenses con Discapacidades, en la que alegaban que los impedimentos físicos a la entrada a los juzgados infringían sus derechos. El Colegio de Abogados de Estados Unidos, en calidad de *amicus curiae*, sostuvo que: «Los tribunales deben ser un modelo de accesibilidad». Y más adelante continuó: (Los juzgados) deben estar libres de obstáculos — y por tanto, abiertos a todos... es esencial para la legitimidad y



la confianza pública en la administración de justicia. La falta de igualdad de acceso a los tribunales perjudica no sólo a las personas que están excluidas, sino también a la administración de justicia misma. En la opinión de la mayoría, el magistrado del Tribunal Supremo, John Paul Stevens, dictaminó que el Título II es constitucional «según se aplica a las clases de casos que suponen el derecho fundamental de acceso a los tribunales». Por tanto, la decisión obliga a todos los juzgados y edificios públicos de Estados Unidos, incluido el Tribunal Supremo de Estados Unidos, a atender a las necesidades de los discapacitados mediante la instalación de rampas de acceso, ascensores especiales, barandillas, baños accesibles a los discapacitados y otros arreglos.

EL COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES DEL DERECHO

La Constitución establece el derecho fundamental de acceso al sistema judicial. Los tribunales, como custodios de los derechos individuales de cada persona, tienen una responsabilidad especial de proteger y hacer cumplir el derecho de igualdad de acceso a la administración de justicia. Si los tribunales tienen esta responsabilidad especial, pero carecen de una policía judicial que haga cumplir sus decisiones ¿cómo es que se cumplen? Existen dos razones importantes: 1) la confianza pública en la administración de justicia en general y 2) un firme compromiso de los colegios de abogados de trabajar con el poder judicial para establecer y exigir el cumplimiento de las decisiones judiciales.

Como presidente del colegio de abogados estadounidense que cuenta con el mayor número de miembros, considero que es importante examinar ahora cómo se relaciona este segundo punto con el poder judicial. Si el poder judicial es el custodio de los derechos del pueblo, los colegios de abogados y sus miembros son la infantería. Los profesionales del derecho y los que ejercen la abogacía soportan gran parte de la carga. En vista de esto, el Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA) ha establecido 11 metas que tratará de alcanzar en su intento de «Defender la libertad y buscar la justicia». La segunda de esas metas es «Promover un acceso significativo a la representación legal y el sistema judicial de Estados Unidos para todas las personas, cualquiera que sea su condición económica o social».

Fue en defensa de esta meta que la ABA presentó su alegato *amicus curiae* en nombre de los estadounidenses discapacitados en el caso de *Tennessee contra Lane*. Cuando estalló el escándalo de Watergate, Chesterfield Smith, entonces presidente de la ABA, declaró en un comunicado de prensa: «nadie está por encima de la ley», palabras que más tarde aparecieron en todos los principales periódicos del país. Posteriormente, la cámara de delegados de la ABA, integrada por 474 representantes jurídicos de los 50 estados y los territorios de Estados Unidos, votó por unanimidad contra la concesión de inmunidad legal al presidente Nixon.

Los colegios de abogados han reconocido desde hace mucho tiempo que deben hablar por el poder judicial cuando éste no puede hacerlo por sí mismo. Esto es especialmente importante durante litigios en curso, por ejemplo cuando la prensa critica el fallo de un juez y la confidencialidad de las actuaciones impide al juez explicar personalmente sus decisiones. La reacción de la prensa puede ser cuestionar no sólo las decisiones del juez, sino el hecho de que aparentemente no está dispuesto a responder. Los colegios de abogados también están en posición de ayudar al público a comprender mejor las actuaciones y la justificación de los fallos judiciales, con el fin de inspirar la confianza pública y generar un debate público atinado.



El edificio del Colegio de Abogados (ABA -American Bar Association) en la ciudad de Washington D.C.

Los colegios de abogados trabajan con denuedo para facilitar abogados capacitados o asesoría legal en causas civiles. Aunque el derecho a la asesoría legal se ha establecido en los casos penales, no está garantizado en los casos civiles. No obstante, desde el decenio de 1870, la ABA ha participado en actividades orientadas a facilitar servicios legales gratuitos a los pobres. La ABA abogó activamente a favor del establecimiento de

asociaciones de asistencia legal en todo el país, porque sus miembros comprenden que, entre otras cosas, los tribunales son más eficaces cuando las partes en un litigio comparecen con un abogado. Se ahorra tiempo, se evitan errores y se asegura la justicia.

DIVULGACIÓN INTERNACIONAL

Irina Lortkipanidze, abogada de la organización CEELI, y Robert Bayer, consejero de asuntos de estado de derecho de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), revelan las respuestas del primer examen de ingreso al colegio de abogados en la historia de Georgia (Tbilisi, noviembre de 2003) Iniciativa de Derecho para Europa central y Eurasia del Colegio de Abogados de Estados Unidos (CEELI).

La labor de la ABA para mejorar el acceso a la justicia no termina en las fronteras de Estados Unidos. A través de sus programas internacionales sobre el estado de derecho, la ABA lleva a cabo una multitud de proyectos en apoyo de actividades en el extranjero para dar a los ciudadanos voz y parte en la administración de justicia de sus respectivos países. En Europa central, Eurasia, Africa, Asia, Oriente Medio, América Latina y el Caribe, los programas sobre el estado de derecho de la ABA apoyan la labor local para mejorar el acceso a la justicia, mediante el establecimiento de programas de asistencia legal y defensores de oficio, la mejora de la administración de los casos, la elaboración de iniciativas de educación legal clínica en la representación de clientes indigentes y la organización de programas judiciales de extensión que enseñan al público el funcionamiento del sistema judicial y le dan a conocer sus derechos y responsabilidades.

El acceso real y significativo a los tribunales es esencial para la salud y vitalidad de toda democracia. Es el escudo de los ciudadanos contra la tiranía, los abusos y las simples equivocaciones. El acceso a los tribunales es la savia del sistema, porque de él emanan todos los demás derechos. Contribuye a mantener el orden cuando surge un conflicto y hace que los ciudadanos participen activamente en el uso debido de su poder colectivo.

PAS - Public Affairs Section
Embajada de los Estados Unidos
Casilla 425
La Paz, Bolivia



Notas Actuales también puede encontrarse en la página web de la Embajada de los Estados Unidos:
<http://bolivia.usembassy.gov/>